

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

11ª REUNIÓN — 8ª SESIÓN ORDINARIA

5 DE ABRIL DE 1995

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO MENEM,

del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don ORALDO N. BRITOS

y del señor presidente de la Comisión de Acuerdos
escribano DEOLINDO F. BITTEL

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P. V. MURGUÍA

Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO ANTONIO DIB.

PRESENTE

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
AVELIN, Alfredo
BITTEL, Deolindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
COSTANZO, Remo J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Erique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio

MOLINA, Pedro E.
OYARZÚN, Juan Carlos
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAN MILLÁN, Julio A.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
VACA, Eduardo P.
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES, CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
JUÁREZ, Carlos A.
LOSADA, Marió A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
PEÑA de LÓPEZ, Ana
SAPAG, Felipe R.
SNOPEK, Guillermo E.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
VERNA, Carlos Alberto

CON LICENCIA:

OTERO, Edison
SÁNCHEZ, Libardo N.

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 1204.)
2. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por el Chaco doctor Luis León procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 1205.)
3. Asuntos entrados:
 - I. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 1205.)
 - II. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se dispone la confección del Digesto Jurídico Argentino (P.E.-83/95). (Pág. 1205.)
 - III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo para el cumplimiento de medidas de ordenamiento por parte de buques pesqueros de alta mar. (P.E.-84/95). (Pág. 1205.)
 - IV. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 1208.)
 - V. Modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (S.-65/95). (Pág. 1209.)
 - VI. Proyecto de ley en revisión por el que se prorroga la entrada en vigencia de la ley 24.241 (C.D.-14/95). (Pág. 1213.)
 - VII. Proyecto de ley en revisión sobre denominación de origen de los vinos (C.D.-16/95). (Pág. 1213.)
 - VIII. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 1219.)
 - IX. Comunicaciones oficiales. (Pág. 1220.)
 - X. Dictámenes de comisiones. (Pág. 1220.)
 - XI. Peticiones particulares. (Pág. 1221.)
 - XII. Proyecto de comunicación del señor senador Massat por el que se solicitan informes relacionados con el Programa de Créditos Blandos y Ayuda Tecnológica a las Pequeñas y Medianas Empresas (S.-201/95). (Pág. 1221.)
 - XIII. Proyecto de resolución del señor senador Solari Yrigoyen por el que se invita a los señores ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a informar sobre la venta de armas realizada al Ecuador y a Croacia (S.-203/95). (Pág. 1222.)
 - XIV. Proyecto de declaración del señor senador Lafferrrière por el que se expresa

preocupación ante las denuncias hechas públicas a través de un órgano periodístico, que relacionan a personal policial en actividad con el secuestro y asesinato de ciudadanos (S.-204/95). (Pág. 1223.)

- XV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Genoud y Bordón por el que se solicita se declare la emergencia agropecuaria de la provincia de Mendoza (S.-205/95). (Pág. 1224.)
- XVI. Proyecto de ley del señor senador Caffero y otros señores senadores por el que se declara monumento histórico nacional al Puente Pueyrredón (S.-207/95). (Pág. 1224.)
- XVII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Sapag y Peña de López por el que se solicita se implemente la difusión y venta de artesanías argentinas producidas en las distintas regiones del país (S.-208/95). (Pág. 1226.)
- XVIII. Proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita se incorporen a los Presupuestos Generales 1996 y 1997, partidas con destino al Puerto Pesquero de Caleta Paula (S.-209/95). (Pág. 1227.)
- XIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Rivas por el que se expresa satisfacción por la actuación de la Delegación Argentina en los XII Juegos Deportivos Panamericanos (S.-211/95). (Pág. 1228.)
- XX. Proyecto de comunicación del señor senador Snopce por el que se solicitan informes sobre el estado actual del ramal ferroviario Bahía Blanca-San Carlos de Bariloche (S.-212/95). (Pág. 1229.)
- XXI. Proyecto de ley del señor senador Mazzucchi por el que se desafecta del dominio público y se transfiere a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche un lote de la Colonia Pastoral Nahuel Huapi (S.-213/95). (Pág. 1229.)
- XXII. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicita la instalación en el Hospital Muñiz de un "hospital de día" para enfermos de SIDA (S.-214/95). (Pág. 1230.)
- XXIII. Proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen por el que se rechazan las manifestaciones del Embajador de Estados Unidos de América en relación a la Ley de Patentes (S.-215/95). (Pág. 1231.)
- XXIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes acerca del incremento de los casos de Hepatitis C (S.-216/95). (Página 1231.)

16. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en un expediente oficiales varios mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite la memoria de ese organismo correspondiente al ejercicio 1993 (O.V.-3/94). Se aprueba un proyecto de resolución. (Pág. 1273.)
17. Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en expedientes oficiales varios mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite informes sobre la auditoría practicada sobre los circuitos administrativo-contables de la Administración Nacional de Aduanas (O.V.-523, y 536/93). Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el dictamen en mayoría. (Pág. 1274.)
18. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en un expediente oficiales varios mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite informes sobre las auditorías practicadas en la empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. (O.V.-138/94). Se aprueba un proyecto de resolución. (Pág. 1277.)
19. Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en un expediente oficiales varios mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite informes sobre el examen especial efectuado en la Secretaría de Salud y Acción Social con respecto a la organización funcional del personal (O.V.-261/94). Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el dictamen en mayoría. (Pág. 1279.)
20. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Fadel por el que se autoriza la edición de 1 000 ejemplares del libro *Con Alas y Raíces*, de la escritora catamarqueña Teresita Nieto de Caballero (S.-1.094/94). Se aprueba. (Pág. 1280.)
21. Moción de vuelta a comisión para el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se otorga el derecho a ser electores activos en el orden nacional a los habitantes extranjeros (P.E.-394/94). Se aprueba. (Pág. 1281.)
22. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución del señor senador Ludueña por el que se expresa reconocimiento por la importancia cultural del arte cinematográfico al cumplirse el centenario de la primera exhibición reconocida como tal (S.-1.619/94). Se aprueba. (Página 1286.)
23. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración del señor senador Miranda por el que se expresa beneplácito por la Medalla de oro 1995 otorgada al arquitecto tucumano don César Pelli (S.-1.680/94). Se aprueba. (Pág. 1287.)
24. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Energía en el proyecto de comunicación del señor senador Avelín por el que se solicitan informes sobre la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) (S.-1.200/94). Se aprueba. (Pág. 1288.)
25. Consideración del dictamen de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Oyarzún por el que se solicita se suministre al Instituto Nacional de Prevención Sísmica la partida presupuestaria para la instalación de una estación sísmológica en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (S.-1.490/94). Se aprueba. (Pág. 1291.)
26. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía en el proyecto de comunicación del señor senador Cendoya por el que se solicitan informes acerca del monto en acciones de empresas y bonos de la deuda pública cotizables en bolsa que se encuentran en poder de bancos —públicos y privados— y de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (S.-1.673/94). Se aprueba. (Pág. 1291.)
27. Inserciones solicitadas por los señores senadores Vaca y Mazzucco referidas a la regulación de las actividades relacionadas con sustancias agroquímicas y biológicas. (Pág. 1292.)
28. A moción del señor senador Genoud se considera un pedido de postergación del tratamiento sobre tablas del proyecto referido a las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central. Se aprueba. (Pág. 1293.)
29. A pedido del señor senador Genoud se resuelve recomendar pronto despacho a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para el proyecto de ley en revisión por el que se crea la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires. (C.D.-142/94.) (Pág. 1293.)
30. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de ley en revisión por el que se crea la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. (C.D.-143/94 y 6/95.) (Página 1294.)
31. A moción del señor senador Britos se considera sobre tablas y se aprueba como proyecto de comunicación el proyecto de declaración del que es autor por el que se solicita la realización de las obras de protección de las estructuras de hormigón de los edificios de diversas facultades de la Universidad Nacional de San Luis. (S.-179/95.) (Pág. 1296.)
32. A moción del señor senador Romero Feris se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comu-

nicación del que es autor por el que se solicitan informes acerca de una posible futura participación privada en la Central Hidroeléctrica de Yacyretá. (S.-236/95.) (Pág. 1296.)

33. A moción del señor senador Humada se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita la eximición del pago de peaje con motivo del próximo acto eleccionario. (S.-180/95.) (Pág. 1297.)
34. Consideración sobre tablas de un proyecto de declaración unificado por el cual el Senado de la Nación rechaza las expresiones vertidas por el embajador de los Estados Unidos de América, señor James Cheek, con relación a la sanción de una nueva ley de patentes. (S.-188, 215 y 247/95.) Se aprueba. (Pág. 1297.)
35. A moción del señor senador Romero Feris se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicitan informes sobre la venta de armas con destino presunto a Venezuela y Panamá en el curso de los años 1994 y 1995. (S.-183/95.) (Pág. 1299.)
36. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Genoud y otros señores senadores por el que se solicitan informes sobre embarques de armas con destino a Ecuador y Croacia. (S.-191/95.) Se aprueba. (Pág. 1301.)
37. Consideración sobre tablas del dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de ley del señor senador Humada y otros señores senadores por el que se crea un Centro de Lucha contra Incendios Forestales y Rurales. (S. 56/94.) Se aprueba con modificaciones. (Pág. 1302.)
38. A moción del señor senador Cafiero se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del que es autor por el que se exceptúa de la aplicación del artículo 1º del decreto 290/95 (reducción del gasto público) a personal de diversos organismos públicos y se deroga el artículo 2º de la mencionada norma. (S.-168/95.) (Pág. 1306.)
39. A moción del señor senador Cafiero se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de declaración del que es autor por el que se adhiera en todos sus términos a la "Declaración de los Parlamentarios Latinoamericanos", firmada en el marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, en Copenhague. (S.-130/95.) (Pág. 1308.)
40. Inserción solicitada por el señor senador Avelín referida a la ampliación de fundamentos del proyecto de resolución del que es autor junto con el señor senador Bordón sobre modificaciones al Presupuesto Nacional 1995. (S.-123/95.) (Pág. 1311.)
41. Moción de preferencia para considerar, con despacho de comisión, el proyecto de comunicación del señor senador León por el que se solicita se proclame ante la comunidad internacional que los hi-

drocarburos existentes en las islas Malvinas pertenecen al dominio público nacional. (S.-142/95.) Se aprueba. (Pág. 1311.)

42. A moción del señor senador Romero se consideran sobre tablas y se aprueban las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto que le fuera pasado en revisión por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco Central. (S.-65/95.) (Pág. 1316.)

43. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 1333.)

II. Inserciones. (Pág. 1336.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 39 del miércoles 5 de abril de 1995:

I

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Avelín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Para efectuar manifestaciones en minoría tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: solicito se me informe cuántos señores senadores hay en la casa y si es factible hacer un llamado para que bajen al recinto y podamos sesionar.

Sr. Presidente (Menem). — Hay treinta y un señores senadores en la casa y se están haciendo las gestiones a que hace referencia el señor senador.

—Se continúa llamando.

—Luego de unos minutos:

Sr. Avelín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Para una manifestación en minoría tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: voy a insistir. Pido que se haga un último llamado, se espere unos minutos y si no se logra quórum, se levante la sesión. No es posible que estemos esperando una hora y media y no podamos comenzar, habiendo tantos senadores en la casa y tantos temas de importancia para ser tratados.

Solicito un último llamado, que se espere un tiempo prudencial y, si los señores senadores no bajan al recinto, que se levante la sesión.

Sr. Presidente (Menem). — Así se está procediendo, señor senador.

—Se continúa llamando.

—Luego de unos minutos:

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Mazzucco. — Señor presidente: efectivamente, habíamos convenido con el señor senador por la Capital la postergación del tratamiento del Orden del Día N° 71, pero por un malentendido ya se lo considero y aprobó.

Entonces, también solicito que se inserten en el Diario de Sesiones los argumentos que tenía previsto exponer en el momento de su consideración.

Sr. Presidente (Menem). — Se van a votar los pedidos de inserción formulados.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se procederá en consecuencia¹.

28

POSTERGACION

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: voy a solicitar una nueva modificación respecto del orden del tratamiento de los temas. En efecto, pido que la iniciativa que se refiere a la Carta Orgánica del Banco Central no sea considerada ahora sino después de terminados los asuntos a ser tratados sobre tablas.

Deseo aclarar que esto que estoy solicitando fue conversado con integrantes de otras bancadas. De tal modo que sobre esa base formulo la petición.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: vamos a aceptar la moción propuesta por el señor senador por Mendoza.

Sr. Presidente (Menem). — Está en consideración un pedido de postergación del tratamiento sobre tablas del proyecto referido a las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se procederá en consecuencia.

Sr. Vaca. — Pido la palabra.

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca. — Señor presidente: en razón de que tenemos quórum estricto, y atento a la importancia que tiene la iniciativa referida a la Carta Orgánica del Banco Central, pediría que también se vote un cuarto intermedio hasta mañana en caso de que nos quedáramos sin quórum.

Sr. Genoud. — No es necesario, señor senador.

Sr. Vaca. — Sucede que son muchos los temas pendientes de consideración.

Sr. Presidente (Menem). — Hay treinta y cinco señores senadores en la casa.

Sr. Vaca. — Está bien, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Insiste en su pedido, señor senador?

Sr. Vaca. — No, lo retiro.

29

PEDIDO DE PRONTO DESPACHO

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar las preferencias aprobadas con anterioridad, con despacho de comisión.

En primer término, el expediente C.D.-142/94, que contiene el proyecto de ley en revisión por el que se crea la Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires.

Sr. Secretario (Pinuzzi). — La Secretaría informa que no ha ingresado dictamen sobre esta iniciativa.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Es la cuarta sesión en la que vengo insistiendo para que este proyecto cuente con el dictamen correspondiente a fin de que pueda ser aprobado. También he señalado que ésta es una iniciativa que no constituye una aspiración de una parcialidad política sino que es apoyada por la Unión Cívica Radical, por el intendente Quindimil y por el señor senador por la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, quien en la sesión pasada apoyó en forma terminante este proyecto.

De tal modo que solicito a los integrantes de las respectivas comisiones que emitan dictamen lo antes posible.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Menem). — Como hay asentimiento, se recomendará a las comisiones de

de vista va a aceptar la explotación unilateral de los hidrocarburos en las islas Malvinas por cualquier empresa de cualquier naturaleza que sea.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.

Sr. León. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — No hay nada en debate, señor senador.

Sr. León. — ¿Le parece que no hay nada en debate?

Sr. Presidente (Britos). — Simplemente hay que votar el tratamiento sobre tablas.

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Simplemente quiero decir que cuando me referí al liderazgo opositor que tenía el señor senador no dije que se haya hablado concretamente del tema Malvinas, sino de muchos otros en los cuales era un crítico. Tenemos derecho a hacer una crítica sin que ella signifique agravios personales.

Con respecto a lo del embajador Cámpora, lo cierto es que él dijo que se retiraba en discrepancia con el manejo de las relaciones con Inglaterra. Ello será por política o por otros motivos, pero es un hecho cierto; nada menos que quien abrió la negociación, se retiró.

Dije al comienzo que nuestro espíritu consistía en buscar nuestra propia integración, para lo cual considero conveniente que este tema pase a comisión con recomendación de pronto despacho, donde podríamos arribar a un texto común. Recordemos que se trata de un tema de actualidad en cuyo tratamiento debemos tener en cuenta la historia, las publicaciones y las pretensiones empresarias de nuestro tiempo.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: teniendo en cuenta la necesidad de contar con una opinión común en este tema adelantamos que no íbamos a apoyar el tratamiento sobre tablas de este tema. Podemos transformar el pedido de una preferencia con despacho de comisión, siempre que el dictamen sea común y acordemos una forma conjunta de expresarnos.

Por las razones expuestas, reitero nuestro voto afirmativo para una preferencia con despacho de comisión, y negativo para el tratamiento sobre tablas.

Sr. León. — Estoy de acuerdo.

Sr. Presidente (Britos). — Se toma nota. Vuelve a comisión...

Sr. Menem. — Hay que votar la preferencia, señor presidente.

Sr. Presidente (Britos). — Se va a votar la moción de preferencia.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Queda aprobada la preferencia.

42

CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL

Sr. Presidente (Britos). — Corresponde considerar las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se reforma la Carta Orgánica del Banco Central, expediente S.-65/95.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Salta.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Por Secretaría se dará lectura.

—Se leen las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley en revisión, que figuran en el punto V de los asuntos entrados.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: vamos a hacer un breve informe de este proyecto que involucra a instituciones importantes como son las entidades financieras y, obviamente, a la entidad rectora que es el Banco Central.

Este proceso se inscribe en el decreto 290/95 del Poder Ejecutivo que el Senado tomara como base para la confección de un proyecto que presentáramos varios senadores durante esta etapa en la que se trata de restablecer la confianza y el financiamiento al sistema bancario argentino.

Sabemos que los depósitos del sistema financiero que ascendían a 45 mil millones a comienzos de la crisis financiera de diciembre han descendido a 39 mil millones, lo cual implica un retiro de un 13 a un 15 por ciento, prueba de la

crisis de confianza que se está intentando revertir con varias normas que este Congreso está tratando acertadamente.

Por medio de este proyecto se faculta al Banco Central a realizar las tradicionales operaciones de redescuentos y adelanto transitorio en cuenta, pero con mayor flexibilidad que la que la Carta Orgánica otorgaba a dicha institución.

Hay que recordar que el Senado no consideró oportuno...

Sr. Avelín. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Romero. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Britos). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Quisiera que el señor senador repita las cifras, si es factible.

Sr. Romero. — Sí, señor senador, cómo no.

Sr. Presidente (Britos). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Los depósitos, que rondaban los 44 mil millones, habrían descendido a 39 mil millones, lo que implicaría una disminución del 14 o 15 por ciento, aproximadamente.

Como decía, hay que recordar que este Senado había considerado no oportuna la sanción de medidas de excepción de carácter permanente a la Carta Orgánica del Banco Central, pronunciándose por la técnica de autorizar esta flexibilidad por un año, sobre todo para los redescuentos y adelantos transitorios en cuenta, lo cual no fue aceptado por la Cámara de Diputados, que optó por hacer la modificación en forma permanente. A mi entender, era más apropiado el tiempo determinado para que en ese período, una vez superada la crisis coyuntural, el Banco Central volviera a tener la rigidez que requiere el manejo del sistema financiero.

Por lo tanto, estas reformas establecen un sistema regulatorio mucho más amplio. No nos oponemos a ello sino que entendemos que hay que decir que altera el concepto de que la oferta y la demanda monetaria y la libre concurrencia iban a regular el mercado, lo cual evidentemente habría quedado desvirtuado por la necesidad de la mayor presencia del Banco Central sobre las entidades financieras.

Hay que decir que no es malo que cuando el Estado desea regular una actividad lo haga con todo el empeño que necesita en momentos en que no son suficientes los mecanismos autoregulatorios del mercado. En este caso existe por parte de las autoridades económicas y moneta-

rias una prudencia para lograr que el control a través del pragmatismo sea eficiente para alcanzar los resultados que todos queremos.

Sí es bueno que estas facultades sean realmente ejercidas con la suficiente competencia y responsabilidad por quienes tengan la función de manejar el sistema que esta misma ley crea, que también hemos tratado nosotros, es decir un fondo fiduciario para socorrer o asistir al sistema financiero.

Si bien el asunto en consideración otorga una concentración de competencias o facultades, incluso en el manejo de estos fondos importantes, es de desear que la norma sirva para llevar aún más confianza al sistema financiero, que ha comenzado a recuperar depósitos en los últimos días. Como las normas las aplican los hombres, es muy bueno que el Congreso esté muy atento al seguimiento de la aplicación de estas normas y de los fondos para que el prestigio que requieren las instituciones hagan que evitemos cualquier riesgo en el sistema. Por eso hay que actuar con transparencia a efectos de que esto no se transforme en un sistema discrecional sino en una protección efectiva de todo el sistema financiero, que ha sido conmovido en los últimos tiempos —repito— por una crisis de confianza que se está revirtiendo.

El proyecto sancionado por la Cámara de Diputados está estructurado en tres partes. La primera, que contempla la protección de los depositantes. La segunda, referida a lo que podríamos denominar la actuación del Banco Central como prestamista de última instancia. Y, por último, una tercera referida a nuevas competencias que se confieren al Banco Central a través de la modificación de la ley de entidades financieras —que integra un subsistema dentro del sistema conformado por la Carta Orgánica del Banco Central y el Fondo Fiduciario que se ha creado como una forma de sostener financieramente esta asistencia.

Sabemos que la situación de los depositantes en nuestro país ha variado en las distintas etapas. Se ha pasado de la garantía total a la garantía parcial. También hay que decir que durante el período de facto, con la ley que establecía un sistema de garantía masiva con tasa libre, se perjudicó enormemente al sistema financiero argentino debido al mal uso de la garantía irrestricta de los depósitos, que era gratuita. Durante el Proceso se vivió una etapa de expansión del sistema financiero con escaso control y tasa libre.

Fue así como el sistema de garantía estatal funcionó de esta manera imperfecta, con los quebrantos que para el país ha significado el ré-

gimen de garantía irrestricta, hasta que la ley 24.144 —que contiene la Carta Orgánica del Banco Central— vuelve al modelo que ya existía en 1935, reintroduciendo la técnica de los privilegios en el caso de las entidades liquidadas.

También hay que decir que fue una iniciativa de este Congreso establecer en ese momento un sistema de seguro de las garantías, que lamentablemente no se pudo lograr por falta de consenso entre los propios actores de ese seguro o esa garantía, que son las entidades financieras. La falta de previsión impidió que a través de un consenso se pudiera concretar la creación de ese seguro para el régimen de depósitos.

Con este proyecto de ley, el actual régimen —que contiene el sistema de privilegios— será ampliado de 3 mil a 5 mil pesos. Además se antepone ese privilegio permitiendo no sólo que la liquidación judicial funcione como tal sino que también el ahorrista pueda hacerse de esos fondos en el proceso previo a la liquidación judicial. Esta es la sustancial modificación en lo referido a las entidades financieras.

Por otra parte, —y tal como se dijo la vez pasada— este seguro que se crea para cubrir los riesgos de los depósitos bancarios es limitado, obligatorio y oneroso, y antes de la puesta en funcionamiento debe ser revisado y analizado por los señores senadores en las comisiones que se ocupan de esta materia.

Por lo tanto, estamos yendo hacia un sistema mixto cuyos antecedentes históricos y en el derecho comparado solicito se inserten en el Diario de Sesiones, para ahorrar tiempo a los señores senadores.

Sr. Romero. — Debemos decir respecto del segundo punto que la garantía de los depósitos es un tema que en el mundo ha generado amplia preocupación. Los distintos antecedentes demuestran su evolución desde los sistemas de mayor intervención a los más liberales. Estos sistemas que sustituyen la garantía por parte del Estado deben asegurar que no suceda que los depositantes se orienten hacia ciertas entidades que ofrecen más resguardo en desmedro de otras que pueden ofrecer menos. De allí la importancia de que este régimen tienda hacia el equilibrio de la protección del sistema y no al desequilibrio de los depósitos en ciertas entidades con la consiguiente concentración que pudiera existir.

En cuanto a la reforma de la Ley de Entidades Financieras, debo decir que otorga muchísimas más facultades al Banco Central en la etapa previa a lo que es la liquidación. Por ello éste

puede establecer políticas de tipo preventivo respecto de los activos y los pasivos de las entidades financieras para la liquidación previa de las cuentas deudoras de los ahorristas.

De esta manera, una vez que la entidad ha sido saneada, podrá seguir su curso, o directamente se procede a la liquidación de carácter judicial, con lo que evitamos la intervención en la liquidación, que existía originalmente en el sistema de entidades financieras. Por éste, el Banco Central de la República Argentina terminaba siendo víctima, luego de juicios enormes, a través de las liquidaciones mal efectuadas que los jueces consideraban mal realizadas.

De esta manera, se evita ese procedimiento, llegando la entidad financiera a los juzgados para su liquidación, previo al intento de saneamiento o de normalización de su cartera activa y pasiva. Estos casos se pueden dar cuando la entidad lo solicite o cuando se produce algún hecho que conforme a las disposiciones importa la disolución o el riesgo de la disolución de la sociedad.

En tercer lugar, este mecanismo va a funcionar cuando esté afectada la solvencia o la liquidez de la entidad y ello no se pudiera solucionar por medio de un plan de regularización y de saneamiento que el banco debe efectuar.

Después están los otros casos que la misma ley prevé, que tienen que ver con la facultad de exigir a las entidades que modifiquen sus registros contables, exteriorizando pérdidas que pudieran estar simuladas bajo la apariencia de activos cuya cobrabilidad, realización o liquidez no fuesen razonables a juicio del Banco Central: incluso se dispone la posibilidad de la reducción de los capitales.

Existe aquí la idea de la irreprochabilidad de los registros contables, como una suerte de bienes públicos adeudados por las entidades financieras a terceros, básicamente a los depositantes.

Otra posibilidad que el Banco Central tendrá consiste en que resuelva un aumento de capital y de reservas, a fin de que la entidad se ajuste a las normas que son obligatorias para el resto del sistema bancario.

También el Banco Central puede reducir o eliminar total o parcialmente a los accionistas que están o que queden en una operación de transferencia o de fusión; o también obligar a transferir sus acciones a terceros. En cuanto a los compradores, también van a existir normas de mayor rigurosidad para ingresar al sistema financiero, esperando que esto no signifique que éste quede cerrado de tal manera que en el futuro

solamente puedan participar aquellos que están dentro del sistema. Se debe entender que siempre las crisis del sistema financiero han sido producidas por quienes están dentro de él y no por los que se encuentran afuera. Por lo tanto, debería ser muy estricto el control en cuanto a quienes están en el sistema, y no tanto de aquellos que teniendo idoneidad puedan incorporarse desde otros sectores de la economía.

Otra línea de acción que establece este proyecto es que el Banco Central está habilitado para disponer la venta de las acciones representativas del capital de las entidades financieras, incluyendo el pertinente derecho de suscripción de los aumentos de capital.

Estas son disposiciones similares a las que funcionan en otros países, como las del sistema estadounidense, por el cual se obliga a comprar y a asumir las obligaciones a los mismos socios de una entidad financiera, ya que se dispone que el Banco Central puede excluir del activo algunos bienes para el pago de los créditos de los depositantes en contra de aquélla, o de las acreencias del propio Banco Central, que están definidas en el artículo 53.

En cuanto a las entidades en situación de disolución, el Banco Central queda habilitado para excluir activos, a fin de pagar los depósitos, sometiéndose el resto del activo a las reglas del derecho común, que es —como dijimos— lo que conlleva la posibilidad de liberar el sistema del seguro de depósitos del pago de los depositantes. Si los depósitos de la entidad financiera son pagados a partir de ciertos activos suyos, por supuesto esos depósitos ya no serían pagados por el sistema de seguros que se autoriza crear por esta ley. De esta manera, es posible que el Banco Central actúe seleccionando ciertos activos —balanceados con determinados pasivos— y que encargue a alguna entidad la liquidación de la cuenta activo-pasivo hasta que llegue a su cancelación total.

El Banco Central también puede prorrogar o reprogramar los vencimientos de las obligaciones de las entidades sometidas a planes de regulación o regularización y saneamiento con el fin de hacer coincidir las cuentas activas y pasivas, a efectos de su propia autoliquidación.

En el capítulo IV, el punto III del artículo 35 bis regula la intervención dispuesta judicialmente de las sociedades que actúan como entidades financieras, con lo que se desplazan las disposiciones de la Ley de Sociedades y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Basta el mero pedido del Banco Central para que proceda la intervención decretada judicial-

mente, con lo cual la situación se reduce al arbitrio del juez al cual se solicita la medida.

Estas medidas deben ser leídas en el marco de la creación del fondo fiduciario de capitalización bancaria, al que se autoriza a suscribir, integrar aportes de capital, otorgar préstamos a entidades financieras, convertir estas colocaciones en acciones, comprar o vender acciones de entidades financieras, adquirir activos de entidades financieras, realizar los activos que adquiere —ya sea en forma gradual o progresiva—, y realizar las gestiones y transferencias de activos y pasivos financieros que le encomiende el Banco Central, con las condiciones previstas en el decreto de creación del fideicomiso.

El artículo 2º de dicho decreto establece que el fondo dispondrá de las recursos de la transferencia fiduciaria del Tesoro nacional por un monto equivalente al importe que resulte de la colocación del llamado bono argentino y de los recursos provenientes del financiamiento de los organismos multilaterales de crédito. De esta forma se complementarán el Banco Central y este fondo fiduciario, que actuarán como dos brazos de un mismo sistema. Esto guarda relación con el modelo español, estructurado en base a la participación del sistema público, o sea del Estado, y del sistema formado por los bancos que intervienen en él.

Consecuentemente, al producirse los supuestos de hecho que facultan al Banco Central para revocar la autorización a efectos de actuar como entidad financiera, se abre para dicho banco la oportunidad de ejercitar las competencias que hemos analizado. En su caso, y sólo después de esta instancia, la entidad financiera puede desembocar en la liquidación o en su quiebra.

De esta manera se abre el proceso judicial, que puede determinar el cese definitivo de la entidad, o la liquidación a través de la quiebra, que está regulada también en algunos artículos de este proyecto de ley. Por lo tanto, la sanción de la Cámara de Diputados no introduce modificaciones sustanciales en el sistema de liquidación.

En cuanto al fondo fiduciario —ya hemos hablado sobre el particular—, va a servir para reestructurar tanto la banca privada como la pública del país. Ya sabemos que la ley que hemos votado establece una temporalidad de dos años a partir del momento de la respectiva sanción.

Por lo tanto, este fondo y las competencias del Banco Central quedan vinculados a los sistemas que van formando el Banco Central, la ley de en-

tidades financieras modificada y el régimen de fondos fiduciarios, que es el encargado de financiar ese sano equilibrio que debe existir entre las entidades financieras y el control que debe hacer el Banco Central sobre ellas.

También sabemos que ahora se va a dar —según el artículo 1º— la posibilidad de que se incorpore el sistema de seguros privado, creado por las propias entidades. Como dijimos, es de interés de este cuerpo que ese sistema sea analizado al momento de su creación por las propias entidades financieras, de acuerdo con las disposiciones que el Banco Central establezca al respecto.

Es de esperar, obviamente, que estas medidas que estamos proponiendo, estas reformas solicitadas, contribuyan a superar definitivamente la situación crítica del sistema financiero, cuya recuperación ha comenzado a producirse, como se advierte, en estos últimos días.

Por supuesto que también parte del éxito depende —como dije hace un momento— de las personas que lleven adelante este proceso con la responsabilidad y la seriedad que el mismo requiere.

Como no dudamos de que ésa es la voluntad de todos quienes deben intervenir en esta delicada misión, propongo al honorable cuerpo la aprobación de este proyecto, haciendo votos para el éxito de las medidas que acá se proponen.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Señor presidente, señores senadores: con la muy ilustrada compañía del señor senador por la Capital, el doctor de la Rúa, vamos a compartir nuestra exposición en relación con el proyecto que estamos considerando.

Esta mañana, "La Nación" traía sobre este tema un título verdaderamente agudo. Decía ese matutino: "Termina el Congreso su cabalgata económica", en razón, precisamente, de la gran cantidad de tratamientos legislativos que han tenido las distintas medidas que se han intentado para paliar la crisis que afecta fundamentalmente al sector financiero.

Creo que más que una cabalgata, lo que estamos haciendo es una "cuadrera", señor presidente. Esta es una carrera de furia. Creo que las modificaciones que estamos analizando, introducidas por la Cámara de Diputados —sin ningún espíritu peyorativo ni para disminuir o desacreditar la actividad de los legisladores, debo decirlo—, constituyen una verdadera improvisación. Estamos analizando un proyecto revisado

que modifica sensiblemente la sanción que había dado este Honorable Senado a una iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo, que ha sido sustancialmente transformada por la Cámara de Diputados, sin que hayamos tenido el tiempo suficiente para analizar esa revisión ni para contar con un asesoramiento adecuado, teniendo en cuenta la grave responsabilidad que nos cabe como legisladores en el tratamiento de un tema como el que nos ocupa.

Nuestra presencia en el recinto y nuestro deseo de contribuir al quórum señalan la preocupación compartida por encontrar caminos adecuados para la superación de esta crisis.

En primer lugar, nos sorprende el hecho de que este mismo proyecto que envía el Poder Ejecutivo —y que el Senado sanciona— es, en gran medida, modificado por la propia iniciativa del Poder Ejecutivo durante el tratamiento en revisión por parte de Diputados, sin perjuicio de destacar que se atendieron algunas solicitudes del bloque de la minoría radical y que hubo un espíritu de colaboración entre todos los bloques, que también se reitera en este recinto, porque —vuelvo a decir— la crisis es muy profunda y muy severa.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado, senador Deolindo F. Bittel.

Sr. Cendoya. — La crisis de México, como se ha sostenido reiteradamente, fue sólo el disparador de lo que estamos soportando; pero en la situación actual hemos obrado con sorprendente imprevisión.

Desde hace muchos meses, desde mediados del año pasado, los círculos más representativos de la opinión especializada en el país, con excepción de aquellos que practican la cultura de la satisfacción y que están siempre aplaudiendo cualquier medida que toma el Ministerio de Economía y perdiendo todo espíritu crítico que debe guiar un pensamiento serio sobre esta materia, indicaban —a través de especialistas— que el hecho de interrumpirse el nivel de ingreso del capital extranjero en el país y por el aumento de la tasa de interés internacional obligaban a tomar previsiones para el futuro, tendientes a paliar los efectos negativos de ese menor ingreso y del incremento de la tasa de interés.

También se señalaba por parte de todos los observadores imparciales de la realidad económica que la situación bancaria argentina era una materia pendiente, pues el Banco Central se había mostrado absolutamente ineficaz en la pre-

visión y en el manejo de una crisis evidente. Estábamos tan desgarnecidos frente a la crisis, señor presidente, que me permito recordar una contestación del propio presidente del Banco Central de la República Argentina en una revista especializada que se llama "Los Bancos en el Mundo", opinión publicada el 23 de diciembre de 1994, es decir el mismo día o el anterior o posterior a la crisis.

Le señalan al presidente del Banco Central en la entrevista cómo va a afectar el aumento del riesgo argentino y las dificultades en obtener financiamiento externo a la tasa local. Y contestó el presidente del Banco Central, cuya capacidad técnica no discuto, pero su falta de previsión tampoco puede disculparse: Seguramente, el año próximo impactará en un aumento de la tasa de interés, aunque no de una forma muy importante. No significará un problema para el financiamiento de la inversión o el consumo.

Dijo esto en diciembre del año pasado, y desde ese momento hasta ahora ha desaparecido totalmente el crédito en el país, como lo ha reconocido recientemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Creo que en esto ha habido una gran improvisación. No hubo una observación del sistema financiero, con los peligros que se estaban advirtiendo y que obligaban a tomar medidas que deben adoptarse ahora pero —seguramente— con un costo grande, el que se va a traducir en suspensiones, despidos de personal y pérdida de puestos de trabajo, lo que va a tener una gran significación sobre la población argentina. Precisamente, va a tener una significación muy importante sobre la banca del interior del país, porque las dificultades financieras por que atraviesa la banca del interior del país no se deben a un mal manejo financiero sino que responden a los problemas que está sufriendo la economía real del interior del país.

Tengo también a la vista un excelente trabajo publicado por un conjunto de investigadores argentinos, que fue propiciado por ABAPRA, que es la asociación que agrupa a los bancos de provincia, ABIRA, que agrupa a los bancos privados del interior del país, el Banco Hipotecario Nacional, y otras instituciones. Hay cifras aterradoras sobre la gravedad del problema financiero, mientras los funcionarios comenzaron por desconocer la existencia de una crisis para luego expresarla en los patéticos términos con los que han influido sobre la voluntad patriótica de los legisladores para imponer las modificaciones que estábamos haciendo.

Para darse una idea de la situación en que se encuentran los bancos, recojo estadísticas que están avaladas porque un reputado economista argentino, el doctor Folcini, recomienda el libro a que acabo de hacer referencia en el prólogo. Se dice allí que teniendo en cuenta la situación irregular que se encuentra en las carteras de los bancos en el país, en el interior del país hay una situación irregular en enero. Habría que ver cómo está la situación actual. Se agrega que la producción primaria está atrasada en lo que se refiere a pagos a los bancos en una proporción del 74,5 por ciento de la cartera, y que la industria manufacturera está en situación irregular con los bancos en un 48,5 por ciento; el sector de la construcción lo está en un 70 por ciento; el comercio mayorista en un 62,7 y el minorista en 83,3.

Estos datos revelan que la economía real se ha transferido a la economía financiera. El Poder Ejecutivo trata de salir de este problema propiciando modificaciones sustanciales a algunas leyes.

Creemos que en el fondo de este problema subyace una falta de coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina.

A nosotros nos parece que, a tenor de las disposiciones que se han tomado en el curso de la crisis, el Ministerio de Economía no está dispuesto a aceptar la autonomía funcional irrestricta del Banco Central, que está reconocida por la ley. Tampoco observamos que el Banco Central esté dispuesto a ejercer su autonomía frente a las constantes invasiones de sus facultades por parte del Ministerio de Economía, a través de decretos e incluso de leyes.

Pienso que esta situación se originó cuando se señaló, en oportunidad de la sanción de la Carta Orgánica del Banco Central, que la entidad tenía plena autonomía y sus funcionarios asegurada su permanencia en los cargos durante un término de seis años, la cual derivaba de un acuerdo del Senado.

Este punto no fue respetado por el Ministerio de Economía con anterioridad. Ustedes recordarán que el titular de esa cartera tuvo un serio enfrentamiento con el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Este último quiso permanecer en su cargo en virtud de la ley, pero el Poder Ejecutivo optó por intervenir ese organismo.

En aquella oportunidad señalábamos que el proyecto decía que duraban seis años en sus funciones pero el Ministerio de Economía inter-

pretó que tenía que ser "salvo intervención del Poder Ejecutivo".

Esta situación conspira seriamente contra la necesidad de accionar rápidamente para superar la crisis financiera. Se trata de una crisis que se manifiesta, como lo señalaba con precisión el miembro informante de la mayoría, no sólo con la pérdida de los depósitos globales del sistema, estimada en el orden de los 6 mil o 7 mil millones de pesos —cifra que debe significar entre el 8 y 10 por ciento del total— sino fundamentalmente —y esto es lo más peligroso, costoso y doloroso para superar— con la redistribución de esos depósitos en un conjunto de bancos. Este conjunto de bancos se ha quedado con la mayor parte de los depósitos a causa de manifestaciones de funcionarios, incluso del propio Banco Central, que contribuyeron a crear un clima de incertidumbre y desconfianza en el país. Por ejemplo, se dijo que había que prevenir al depositante para que confiara sus depósitos a los bancos serios, dando por entendido que había bancos poco serios, no obstante que todos están sometidos a la misma vigilancia por parte del Banco Central de la República Argentina. Otros funcionarios dijeron que sólo se habían cerrado unos "kioscos", lo cual no tenía mucha importancia. Recuerdo que esa afirmación motivó una crítica de Alsogaray cuando dijo que precisamente la crisis del año 30 empezó con la quiebra de un pequeño banco en Viena.

También este fenómeno tuvo su origen en disposiciones del gobierno, como la de postergar el cumplimiento del pago de cheques contra las cámaras compensadoras aunque sus libradores tuvieran fondos suficientes acreditados en cuenta corriente, o como la de creación de una red de salvataje; pero en realidad esa función es propia y específica del Banco Central. Otra medida fue la creación de un fondo fiduciario financiero. Esta medida también se funda en una atribución propia y específica del Banco Central, que en el ejercicio de su autonomía debería haber impugnado este recorte impropio de facultades.

Este tipo de determinaciones contribuye, como dije, a agravar una crisis cuya resolución no es fácil prever por lo dolorosa que será su corrección actual.

Sr. Presidente (Bittel). — El señor senador Cafiero le solicita una interrupción ¿se la concede?

Sr. Cendoya. — Cómo no.

Sr. Presidente (Bittel). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Sin ánimo de polemizar, quiero aclarar que esa renuencia del Banco Central a asumir funciones de prestamista de última instancia deriva de la filosofía de la actual Carta Orgánica.

Es decir, yo podría sostener que fue un error aceptar esa filosofía, pero no puedo dejar de admitir qué es lo que se está cumpliendo. Esta reforma legal que se está proponiendo tiende a corregir lo que en su momento, a mi juicio, fue un error conceptual: querer convertir al Banco Central sólo en una caja de conversión, como señala la doctrina clásica, y no dejarle funciones en orden al manejo de una política monetaria más activa que hubiera prevenido, con mucha mayor flexibilidad y eficacia, una crisis como la que estamos atravesando.

Sr. Presidente (Bittel). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Le agradezco la aclaración al señor senador Cafiero porque ratifica lo que estoy sosteniendo. Tengo la misma línea de pensamiento que ha esbozado el señor senador por la provincia de Buenos Aires.

Recuerdo que cuando se sancionó la ley de entidades financieras desde muchos puntos de vista críticos se señalaba que era un error que el Banco Central de la República Argentina resignara esa facultad de ser prestamista de última instancia y que en el caso de que se produjera una crisis bancaria los hechos iban a estar por encima del texto de la ley. Pero cómo será la filosofía de lo satisfecho —por llamarla de alguna manera— que en la misma revista a la que hice alusión el ex presidente del Banco Central, doctor Rodolfo Rossi, el 23 de diciembre pasado decía que no le preocupaba el problema fiscal sino que creía que los problemas más serios eran el elevado costo del trabajo y la falta de modernización de las normas laborales. En cuanto al déficit, señalaba que sería plenamente financiado por el crédito externo e interno —se reveló que no era cierto, pocos días después— gracias a que la Argentina ha mejorado en su performance y es más confiable ya que el Banco Central actúa como prestamista de última instancia a través de operaciones activas de pases de garantías de los títulos públicos, lo cual se reveló como absolutamente insuficiente porque cuando se desató con intensidad la crisis hubo que recurrir a la red de salvataje establecida por el Banco Nación y a la restitución de una función que es tradicional en toda la banca central del mundo de actuar como prestamista de última instancia.

Sr. Presidente (Bittel). — El señor senador Romero le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Cendoya. — Sí, con mucho gusto.

Sr. Presidente (Bittel). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — La duda es cómo entiende el señor senador, en una etapa en que hay una ley de convertibilidad que hace que las reservas respondan a los pesos circulantes, que se puede fondear un banco central para cubrir las necesidades de prestamista de última instancia, aún más si hay una crisis severa de retiro de depósitos, como usted dijo anteriormente. Entiendo que no estará proponiendo el sistema tradicional anterior que era la emisión lisa y llana, que fue una de las causas más grandes del deterioro monetario del país. Tal vez, el señor senador por Córdoba tenga otra idea que yo no conozco.

Sr. Presidente (Bittel). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Fondear como se lo está haciendo ahora, es decir, emitiendo un bono de dos mil millones de dólares para pasarlo al sistema de salvataje de los bancos.

Lo que sostengo es que si hubiera existido un mínimo de previsión y si los funcionarios no se hubiesen sentado sobre una falsa sensación de estabilidad que se consideraba absoluta, los costos hubiesen sido mucho menores que los actuales. Porque ahora esto se soluciona sobre la base de un problema acerca del cual ni siquiera existe conformidad entre los banqueros, ya que la redistribución por parte de los bancos chicos en favor de los grandes ha provocado que su situación de iliquidez se transforme en brevísimo plazo en insolvencia, lo que obligará a la liquidación de esos bancos y producirá el cierre de muchísimas fuentes de trabajo en el país. Esto ya ha motivado una enérgica reacción de la Asociación Bancaria, que los señores senadores habrán podido observar a través de todos los diarios del país.

Sobre este mismo tema se sostiene en el trabajo que estoy comentando, perteneciente a los señores Arrigoni, Barbero, De Bonis, Zubillaga y Brunelli; que no está acreditado que exista en el país un sobredimensionamiento del sistema financiero. Para fundamentar esta afirmación, se hace la comparación entre cinco países, con sus respectivos PBI, de la cual surge lo contrario, es decir que aún cabría mantener el sistema bancario existente en el país pero siempre que éste hubiera estado protegido por una red de seguridad, que aparece tarde y mal manejada.

En Chile, por ejemplo, hay 13 millones de habitantes y cuarenta bancos; es decir que existe una población por banco de 345.250 personas. La Argentina tiene 33 millones de habitantes y 167 bancos, con lo cual la relación es de 200 mil habitantes por banco. Los Estados Unidos tienen 252 millones de habitantes y 12.390 bancos, lo que nos da una relación de un banco cada 20 mil habitantes. Brasil, tiene 156 millones de habitantes y 253 bancos, con 618.853 habitantes por banco. Finalmente, España tiene 39 millones de habitantes y 169 bancos. Es decir que nosotros tenemos una situación similar a la de países de economía emergente como Chile o Brasil.

El problema del sistema bancario argentino, que no atacó el Banco Central durante todo este último tiempo, es el de la escasa "bancarización" de nuestro sistema. En la Argentina solamente un 10 por ciento de la población requiere servicios bancarios, y esto se debe a un círculo vicioso al cual no se le ha sabido pegar un corte. La gente dice que no utiliza los servicios bancarios porque son muy costosos, y esto es cierto. Por su parte, los bancos sostienen que los servicios tienen un alto costo porque la gente no los utiliza. Seguramente ésta es una cuestión que va a ser objeto de una discusión muy importante a fin de lograr una redefinición del sistema que, debido a la gravedad de la crisis, por todos reconocida, no acepta ya el mantenimiento del actual *statu quo*.

Pero dejando de lado esos aspectos, quiero señalar también sobre la gravedad de la crisis del sector una conclusión fundada en un buen manejo de estadísticas e información por parte de un instituto que preside el ingeniero Alsogaray. En esta conclusión se señala que si bien es posible que las medidas que se intenten en estos momentos puedan servir para canalizar la crisis —y si así fuera deberíamos congratularnos—, no se dice cómo sigue este proceso luego de esta cura provisoria que pueda darse al sistema.

En la revisión realizada por la Cámara de Diputados al proyecto en análisis se introducen varios aspectos novedosos, porque no solamente se modifica la Carta Orgánica del Banco Central sino también la ley de entidades financieras, ratificando indirectamente la creación de este fondo fiduciario para el salvataje financiero de los bancos en dificultades.

En lo que respecta al sistema de seguro, se ha creado una gran incertidumbre pública en estos momentos porque se hace referencia a un sistema de garantía en la ley vigente, cuando en realidad esta norma no tiene ningún sistema de

ese tipo y solamente establece un sistema de privilegios en favor de los depositantes por montos menores a los 3 mil pesos sobre los encajes constituidos por los bancos liquidados. Se trata de un privilegio exclusivo y excluyente. Pero no existe garantía de los depósitos, sino a partir de la entrada en vigencia de este artículo 1º, que en mi opinión ha sido redactado con menoscabo de las facultades constitucionales sobre esta cuestión.

Fíjense ustedes que el artículo 1º dice: "Créase el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos que será limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras...". Es decir que la ley de entidades financieras no establece garantías; sólo tiene privilegios y protección sobre los encajes. Y continúa diciendo el proyecto: "...sin comprometer los recursos del Banco Central de la República Argentina ni del Tesoro nacional. Facúltase al Banco Central de la República Argentina a organizar y poner en funcionamiento el sistema creado por el presente artículo".

Esto constituye una delegación de facultades legislativas, que la nueva Constitución sólo permite por tiempo determinado y para materias específicas.

Esta creación del seguro bancario debiera ser motivo de una reforma legislativa y no confiar en un organismo administrativo, por autónomo que sea, la facultad de dictar normas que, de alguna manera, pueden llegar a comprometer el patrimonio del Estado, ya que no se trata de meros actos administrativos que le caben a este tipo de organismos en virtud de su competencia.

Creo que esto viola la disposición constitucional en cuanto limita las facultades de delegación, estableciendo el término por el cual debe ejercerse la misma.

El proyecto de la Cámara de Diputados modifica la Carta Orgánica del Banco Central, en la forma en que lo ha indicado con precisión el señor miembro informante de la mayoría, y avanza directamente sobre la Ley de Entidades Financieras, pero con una técnica legislativa que es verdaderamente sorprendente por lo confusa y de difícil comprensión, en particular para la gente que no tiene sobre este tema una especialización muy significativa.

Fíjense que el artículo 3º, que modifica la Ley de Entidades Financieras, tiene una extensión aproximada de tres hojas en donde expresa lo que debe hacerse. Esto es contrario a la técnica

legislativa, que exige que las normas se expresen en cláusulas breves, abstractas y de comprensión universal.

Esta iniciativa efectivamente introduce algunas ventajas sobre el sistema actual de liquidación de bancos, ya que antes de ordenarse esta medida la entidad bancaria puede intentar, instada por el Banco Central, su reestructuración.

Pero, según mi criterio, este proyecto modifica negativamente la situación de los bancos cooperativos, a los que puede obligarse a la transformación en sociedades anónimas para aceptar los planes de rehabilitación o de recuperación. De esta manera, evidentemente, se modifica el espíritu de la Ley de Cooperativas, que no admite la transformación en entidades con fines de lucro, ya que son de distinta naturaleza.

Asimismo, también se modifican de manera positiva algunos aspectos relacionados con la liquidación de los bancos.

Pero éstas son normas. Acá el problema reside en la necesidad de actuar con un criterio que tienda a recomponer el sistema sobre una base de equidad.

A nosotros no nos satisface este sistema de la fiducia establecida fuera de la estructura orgánica del Banco Central y manejada, incluso, por los bancos que están interesados en comprar carteras baratas y obtener así buenas utilidades.

Me parece que crear este tipo de estructuras simplemente por un decreto, sin instancia legislativa, significa algo así como pedirle a los zorros que cuiden el gallinero.

Creo, y con esto finalizo mi breve exposición, que la situación del sistema bancario argentino requiere actuar inmediatamente, pero los que han fracasado no son los mejores consejeros para determinar las medidas a tomar.

Considero que una buena política del Parlamento argentino hubiera sido tomar una prudente distancia de aquellos funcionarios cuya responsabilidad por omisión aparece, por lo menos, notoriamente comprometida en este penoso proceso.

Sr. Presidente (Bittel). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital del bloque radical.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: usaré muy pocos minutos, ya que la amplia exposición del señor senador por Córdoba, que ha sido brillante y ha puesto en claro nuestra posición, me exime de comentarios detallados.

Sólo quiero señalar que los puntos de discrepancia de nuestra bancada frente a este proyecto de ley, que consideramos necesario para superar

la crisis financiera, se vinculan con nuestra voluntad de evitar el exceso de discrecionalidad del órgano del Poder Ejecutivo para la aplicación del sistema, agregando mayores exigencias y estableciéndole limitaciones precisas para los casos de asistencia financiera, de modo que ésta no se extienda a los depósitos de miembros de órganos directivos o de fiscalización de los bancos, ni a las personas físicas o jurídicas que tengan poder de decisión en las entidades, a las propias entidades o a quienes hayan pactado intereses manifiestamente superiores a los de plaza.

Otro aspecto se refiere a las garantías que deben exigirse. A nuestro criterio, debe exigirse la garantía personal de los miembros del directorio y de los órganos de fiscalización de las entidades asistidas.

En tercer lugar, está lo relativo a las cooperativas, que consideramos necesario preservar en su carácter de tales.

Y, por último, en cuanto a la Comisión de Control Parlamentario que se crea, a nuestro juicio deberían ser las mismas comisiones parlamentarias que se ocupan de estos temas: la de Presupuesto y Hacienda y la de Economía en el Senado, y la de Presupuesto y Finanzas en Diputados.

Sólo quiero agregar, para completar lo expuesto por el señor senador por Córdoba, que en su momento, en 1992, cuando se debatió esta ley, la Unión Cívica Radical alertó sobre el peligro de la cláusula cerrada que contenía la Ley Orgánica del Banco Central en cuanto le impedía actuar como prestamista de última instancia en situaciones de emergencia.

Es claro que entonces se vivía la ilusión de la venida de capitales sin advertir que eran transitorios. Y se creó un esquema económico dependiente de la continuidad de flujo de capitales externos, cuya debilidad se pone de manifiesto ahora.

Decía, entonces, el diputado Olivera —y hago la cita porque me tocaba, en ese momento, presidir nuestro bloque en esa Cámara— lo siguiente: "Un desbalance serio en el sistema financiero, más tarde o más temprano, exigirá una acción gubernamental, ya que los costos de la falta de intervención pueden ser mayores. En consecuencia, es preferible que esta intervención esté adecuadamente regulada, evitando que el proceso carezca de un marco legal apropiado, con toda la carga de discrecionalidad que ello puede implicar. Creemos que el intento de limitar los eventuales préstamos a plazos perentorios es vacío, ya que en presencia de dificul-

tades serias, el plazo de devolución del préstamo lo impondrá la propia realidad".

Se hizo oídos sordos a esta advertencia y está a la vista que, ahora, sobre la urgencia, es necesario actuar. Por eso nosotros, en virtud de estas discrepancias, fijamos nuestra posición respecto del proyecto que se trata.

Queremos que el Congreso funcione; estamos para dar el quórum para que esto se trate y se resuelva. Pero dejamos expresados nuestros puntos de vista y reiteramos nuestro deseo de que una actitud menos cerrada, menos soberbia de la conducción económica del gobierno, permita prevenir mejor las crisis y evitar errores como el que aquí se ha producido.

Sr. Presidente (Bittel). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente, señores senadores: vuelve a este honorable cuerpo en revisión el proyecto de ley que aprobamos sobre tablas el pasado jueves 9 de marzo.

En aquella ocasión, movido por la necesidad de dar una salida legal a las disposiciones que se estaban tomando en la esfera del Banco Central de la República Argentina, que excedían notoriamente las facultades que por ley se acordaron en su Carta Orgánica, este Senado de la Nación aprobó el tratamiento sobre tablas y dio, luego, curso favorable a la iniciativa que, en principio, amplía ciertas facultades y plazos que le acuerda aquélla a la institución bancaria rectora del sistema financiero argentino.

Aquel proyecto constaba simplemente de dos artículos. El primero modificaba las facultades del Banco Central otorgándole el carácter de prestamista de última instancia. El segundo requería al Poder Ejecutivo proponer a este Congreso de la Nación la organización de un sistema de seguro de garantía limitada, onerosa y privada que cubra los riesgos de los depósitos bancarios. Pero la norma que llega en revisión no se limita a mejorar o a marcar diferencias con lo aprobado en este cuerpo, sino que introduce paralelamente profundas modificaciones a la Ley de Entidades Financieras, a la vez que altera sustancialmente el sentido dado en este recinto al tema del seguro de garantía de los depósitos.

Estas razones me llevan a concluir la inconveniencia de este tratamiento sobre tablas, por cuanto el bloque autonomista entiende que toda materia que debe ser regida por disposiciones que requieran de una ley sancionada por el Congreso de la Nación es lo suficientemente importante como para exigir un lapso mínimo de estudios, a la vez que el concurso y la explicación de

los funcionarios que la proponen, quienes debieran elevarse al grado de rigurosidad cuando se trata de algo tan delicado y tan sensible a la piel ciudadana como son el sistema de garantía de los depósitos bancarios o bien la liquidación de las entidades financieras.

Tengo presente que una legislación desafortunada costó en el pasado más de 60 mil millones de dólares de pérdidas al Banco Central de la República Argentina, es decir al pueblo de la Nación Argentina, que debió sufragarlos mediante el pago de impuestos —principalmente el impuesto inflacionario—, pues aquellas liberalidades de las normas dictadas fueron solventadas, sin duda alguna, por el envilecimiento de la moneda, cuyo valor fue reducido a su diez millonésima parte.

Señor presidente: en estos días, a través de decretos, resoluciones o normas legales de naturaleza tan genérica como la que hoy se propicia, se han creado fondos fiduciarios que tendrán el manejo discrecional de sumas que superarán los 3.500 millones de dólares, si se considera que el destinado a la reconversión y privatización de los bancos provinciales alcanzará los 2.500 millones y toda vez que el vinculado con los bancos particulares se lo estima en el orden de los mil millones de dólares.

Si añadimos el patrimonio que se constituirá para el sistema de garantía de los depósitos, advertimos que estos nuevos entes manejarán capitales superiores a los 4 mil millones de dólares.

Estas sumas quedarán al arbitrio del manejo de los funcionarios que se designen, quienes podrán aplicarlos a objetos tan amplios como los que prevén las funciones de los contratos de fideicomiso, sin que se les fijen restricciones a los modos y forma relativos a la toma de decisiones y a su implementación.

¿Quién decide, cómo, cuánto y en qué términos se adelantarán a las provincias que encomienden privatización de sus empresas o realización de sus bienes? ¿Quién y con qué criterio señalará el carácter de elegible para una provincia, habilitándola a participar de estos fondos? Sin poner en tela de juicio la capacidad y honestidad de los futuros funcionarios que deberán manejar esos fondos, me permito señalar la tremenda puja de poderes que se desata ya en derredor de ellos, a lo que este Congreso permanece ajeno, designando algunos de sus miembros para seguir el cumplimiento de decretos en una desjerarquización de sus atribuciones.

Seguramente que tanto el señor presidente como los señores senadores conocen a ciencia

cierta los innumerables juicios originados por los accionistas o titulares de bancos o entidades financieras liquidados por orden del Banco Central que, sea por errores administrativos e incumplimiento de formalidades insalvables, sea porque existieron intencionalidades políticas u otras razones, recurrieron ante la Justicia logrando fallos favorables confirmados en su casi totalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obteniendo indemnizaciones multimillonarias que debió o deberá pagar todo el país.

Por eso, señor presidente, pienso que no es conveniente que un tema de esta naturaleza sea tratado de esta manera. Y más aún considero totalmente equivocada la resolución que piensa darse a la crisis financiera. No se trata solamente de evitar la publicidad de que tal o cual banco debe ser liquidado y de que el monto de los depósitos que tienen garantía sea hasta tantos o cuantos pesos. Se trata más profundamente de repensar el sistema financiero y de ponerlo al servicio de la comunidad canalizando hacia la producción y comercialización de bienes y servicios los fondos que son el producto del ahorro nacional. Se trata de que este ahorro no sea conducido a puras especulaciones financieras, donde a través del juego de "futuros" y de "arbitrajes" se concreten diferencias sustanciales que crean "efectos riquezas" cuando los mercados son positivos, hecho externo al país si tenemos en cuenta el fenómeno de la globalización y nuestra característica de mercado emergente, y que cuando ocurre lo contrario, cualquiera sea la causa, producen un efecto de socialización de las pérdidas al arrastrar a la baja a los mercados de capitales donde confluyen también los pequeños ahorristas, sea en forma directa o a través de los fondos de inversión.

Se dirá que la urgencia de la crisis no admite demoras. A este argumento le opongo que la crisis está sin resolución desde mediados de enero y que la caída de los depósitos no es un fenómeno de estos días, que por el contrario al menos pareciera haberse detenido —ojalá sea así—, y que ha de privar más en el ánimo de la gente al conocer la existencia de un compromiso cierto por parte del Congreso de la Nación, convalidado por una declaración del Poder Ejecutivo, de que se le respetarán sus depósitos que sacar una ley sin el necesario análisis y cuyas fallencias no tardarán en ponerse de relieve.

Es preferible esta demora a tener que arrepentirnos por haber acordado delegaciones irrestrictas o por habernos limitado a convalidar con la creación de una comisión bicameral de seguimiento, de la que pueden resultar hechos de

consecuencias dañosas que generarán perjuicios al patrimonio nacional.

Señor presidente: creo, y así lo vengo sosteniendo de manera permanente, que las atribuciones constitucionales que tiene el Poder Legislativo de la Nación le han sido otorgadas para ser ejercidas en su plenitud y no para ser delegadas al Poder Ejecutivo.

No admito bajo ninguna causa esa delegación, así como rechazo la invasión jurisdiccional que con asidua frecuencia se realiza sobre ellas. Por eso entiendo que los denominados fondos fiduciarios, creados por los decretos 286/95 y 445/95 como simples contratos de fideicomiso a suscribirse entre el Estado nacional y el Banco de la Nación Argentina deben tener una entidad jurídica distinta y su accionar estar sujeto a reglas de estricta transparencia y al contralor de la Auditoría General de la Nación.

Del mismo modo, en materia de organización de un sistema de garantía de los depósitos en las entidades financieras, debiera precisarse la naturaleza jurídica del ente que tendrá a su cargo recaudar y administrar los fondos del sistema. Debiera ser este Congreso quien establezca quiénes y con cuánto contribuirán, desde qué momento la cobertura será efectiva, quiénes serán excluidos y cuáles son los montos que cubrirá el sistema, ordenando las prelación y los topes para cada uno de ellos.

Todos somos conscientes de la crisis que afecta al sector bancario. Todos conocemos la importancia de un sector financiero que solamente en la medida de su aceptación por la gente podrá captar los recursos del ahorro y canalizarlos a los demandantes del crédito en cantidades suficientes y a precios razonables. Pero esto no se ha dado a la fecha. Los déficit actuales han quedado ocultos por los supuestos éxitos del programa. Únicamente se culpaba a algunos bancos oficiales de provincia. Hoy, a la par de la reconversión y privatización de aquéllos, es necesario un fondo especial para los demás bancos, cuya creación se resolvió por decreto el pasado miércoles —publicado el 31 de marzo— y de que, como surge de la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados, muy pocos diputados tenían conocimiento de su contenido al momento de la aprobación de este proyecto que lo incluye.

Cuando en cumplimiento de lo dispuesto por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina su presidente concurrió ante este Congreso el pasado octubre, nos presentó un extenso informe que con cuadros anexos

abarcó noventa y nueve fojas. Nada hace sospechar en su texto que un factor externo pueda ser ulterior causa de semejante descalabro financiero que, sin duda, estaba subyacente. Nada alertó sobre las debilidades que la aplicación de las leyes vigentes y sus reglamentaciones estaban produciendo o tolerando en el sistema financiero.

Dos meses más tarde de esta visita, el cierre definitivo de un banco golpeado en sus operaciones especulativas traería aparejadas declaraciones sobre la existencia de "quioscos" bancarios y la superabundancia de entidades, la necesidad de que un centenar de ellas fuesen eliminadas, hecho que se viene cumpliendo metódicamente por la vía de absorciones o fusiones.

Cuando hablo de descalabro, los números me habilitan a tal calificativo. Los depósitos en moneda nacional han caído 4.622 millones de pesos; los depósitos en moneda extranjera, 2.956 millones de pesos; en conjunto, dada la paridad peso-dólar, 7.578 millones de pesos o dólares. La base monetaria reducida hoy a la circulación del efectivo en poder del público y a las existencias de dinero en los bancos apenas supera los 10 mil millones de pesos, es decir el nivel de fines de 1992. Las reservas que respaldan la convertibilidad, excluidos los títulos emitidos por el mismo Estado nacional, han disminuido desde diciembre pasado en 5.977 millones, es decir que esta caída es del orden del 37 por ciento.

Sin duda que estas cifras justificarían la urgencia. Por mi parte, no la niego, pero no debe servir de sustento a la precariedad ni mucho menos a la solución errónea de la dificultad.

Me permito recordar que desde diciembre pasado se intentaron diversas medidas. Algunas fueron simples manotazos de apuro, tales como la dolarización de los depósitos bancarios en el Banco Central o la constitución de un comité de banco privados y la formación de una red de salvataje a través de la reducción de los efectivos mínimos. Igual entidad tuvieron la transferencia al Banco de la Nación Argentina del carácter de prestamista de última instancia, mediante la aplicación de un mecanismo de depósito indisponible, y la liberación de 2.700 millones de pesos de las exigencias de encaje para aliviar la presión sobre la tasa de intereses interbancarios.

Para ir finalizando este análisis, valga aquí la digresión de que cuando se solicitó refinanciar los pasivos agropecuarios, para lo que hubiese bastado mucho menos, se negó todo auxilio porque se hubiera podido comprometer la convertibilidad, tal como se argumentó.

También se suspendió el pago de cheques con fondos emitidos contra bancos con dificultades y se eliminó transitoriamente el *clearing* de 24 horas.

Se podría continuar la enunciación de medidas que lamentablemente no dieron solución a la crisis. Pese a ellas, ha continuado ahondándose. Hoy su gravedad persiste pero el conocimiento de que habrá fondos frescos en un futuro próximo y que se adoptarán medidas de resguardo para los depositantes, disminuyen su presión.

Sin duda, es preferible que este proyecto se analice nuevamente, vuelva a comisión y que tanto el presidente del Banco Central de la República Argentina como el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos y subsecretarios de las áreas comprensivas de este tema se hicieran presentes a fin de explicar en detalle los alcances de estas medidas y en particular las responsabilidades que puedan emerger de los fondos fiduciarios y de los contratos de fideicomiso a que este proyecto se refiere.

Desearíamos, además, conocer la posición de los trabajadores afectados por esta medida, como así también la de los sectores de la producción y de los servicios que terminarán sufragando los costos de esta reforma.

Al no ser esto posible y en el convencimiento de que esta medidas no darán solución efectiva a la gravedad de la actual situación, voto negativamente este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Bittel). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, del bloque liberal.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: creo que este proyecto constituye una prueba más de ciertas circunstancias más cercanas a la improvisación que al estudio aconsejable de ciertos temas que son de vital importancia para la economía nacional.

En efecto, el origen de este asunto, en lo que al trámite legislativo se refiere, está en un proyecto de ley del senador Romero y otros colegas, mediante el cual el Congreso de la Nación autorizaba al Banco Central de la República Argentina a otorgar redescuentos y adelantos previstos en su Carta Orgánica, para dotar de adecuada liquidez al sistema financiero, aunque con la salvedad de que no podían comprometerse las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetaria.

Se autorizaba asimismo a ceder, transferir o vender a las entidades que tuvieran excedentes de liquidez los créditos que se hubieren adqui-

rido de aquéllas afectadas por la iliquidez. Se otorgaban otras facultades acotando en el tiempo esta autorización hasta el 31 de diciembre del corriente año.

Cuando se trató el proyecto en el recinto, se efectuó un agregado disponiendo que dentro de aquel plazo el Poder Ejecutivo debería proponer al Congreso la organización de un sistema de seguro de garantía limitada, onerosa y privada, con la finalidad de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios.

Entre los fundamentos del proyecto de ley de los señores senadores Romero y otros, se expresaba que era de público conocimiento que existía un fenómeno de psicología social, el cual determinaba que algunos sectores de clientes de las entidades financieras del mercado argentino hayan procedido a retirar sus depósitos. Ante tal situación, por cierto preocupante, máxime ante el peligro precedente de la crisis mexicana, las autoridades del Banco Central informaron acerca de la conveniencia de implementar una mayor flexibilidad para el uso de la técnica bancaria de los descuentos y redescuentos a ser utilizada mientras aquel fenómeno de psicología social no desapareciera.

En otras palabras, era imperativo restablecer la confianza pública en el sistema financiero, ya que se corría el riesgo de enfrentar las muy graves consecuencias que podrían traer aparejadas las tristemente recordadas corridas bancarias.

Esta situación se veía sustancialmente agravada teniendo en cuenta las afirmaciones del señor ministro de Economía relacionadas con la resolución del Banco Central del 17 de marzo, en la que se expresaba que no se pagarían los cheques de las entidades que registrasen saldos deudores con dicha institución.

Al respecto, el ministro había afirmado que solamente tenía 200 millones de pesos para responder como garantía de los depósitos bancarios. Esta realidad motivó que en oportunidad del tratamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo hiciera conocer, a través del oficialismo que las normas sancionadas por esta Cámara no eran suficientes para resolver la crisis que nos aqueja y nos preocupa.

Por ello, el debate respectivo tuvo que postergarse una semana a la espera de que llegaran, como sucedió, las propuestas del Poder Ejecutivo.

Lo paradójico del caso es que en los fundamentos del proyecto de ley que esta Cámara

consideró y oportunamente aprobó en la sesión del 9 de marzo, se afirmaba —y leo—: “Consecuentemente, se habilita al Banco Central de la República Argentina a actuar frente a la crisis, pero sin afectar las potestades monetarias del Congreso de la Nación y, fundamentalmente, sin modificar la Carta Orgánica del mismo. Tal Carta Orgánica puede, sin dudas, ser modificada, pero ello debe realizarse con circunspección, escuchando a todos los sectores interesados, como epílogo de profundos y calmos debates y con la serena determinación que exige tal delicada cuestión de Estado, con mayor razón si hay un fenómeno de psicología social como el apuntado”.

Yo creo que los hechos son elocuentes. Las pautas a que se aludía en los fundamentos, tan idóneas como prudentes, parecen haber sido olvidadas y borradas de un plumazo no sólo porque ahora, en cambio, se ha decidido modificar varias normas de la Carta Orgánica del Banco Central sino porque nuevamente estamos acuciados por la emergencia y por la necesidad de dar rápida aprobación a un proyecto de ley como el que estamos considerando aquí y ahora.

La ley 24.144 del Banco Central es de 1992 y hoy ya la tenemos que modificar. A todo esto, debe agregarse que el presidente del Banco Central, en una reunión realizada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, desarrollada a fines de septiembre de 1994, afirmó —y leo textualmente—: “En relación a si va a existir una red de emergencia para bancos de provincia, es evidente que la misma ley que sancionó este Congreso impide al Banco Central actuar como red de seguridad. Creo que la ley es muy sabia y no es prudente que el Banco Central sea la red de seguridad de los sistemas”.

Pero, indudablemente, lo que ahora estamos considerando, tal como ha venido en revisión de la Cámara de Diputados, resulta incompatible no solamente con los fundamentos del proyecto que originariamente aprobara este Senado sino también con las palabras del propio presidente del Banco Central que acabo de recordar.

Entonces, antes de entrar al análisis del tema en sí, quiero llamar la atención acerca de una reiterada forma de tratar los asuntos en los cuerpos legislativos, que deja mucho que desear, y que no contribuye a preservar la jerarquía de las instituciones parlamentarias. Me refiero a la premura que siempre se nos exige, lo que indudablemente atenta contra la posibilidad del estudio detallado, la medida, la prudencia y

el amplio debate que debe caracterizar a esta casa.

Los proyectos de importancia, como el que hoy tratamos, requieren un tiempo razonable para ser llevados a buen puerto. Muchas veces nos hemos concentrado en debates e intercambios de ideas con la intervención de nuestros colegas, asesores y funcionarios; incluso, con la participación de diversos sectores del quehacer nacional. Y si bien toda sanción legislativa es pasible de polémicas y observaciones —como ahora mismo estamos observando, por ejemplo, con la ley de patentes medicinales—, en tales casos habremos satisfecho uno de los requerimientos que, como hombres públicos, la sociedad nos demanda.

Pero nada de ello ocurrió ahora, con la agravante de que estamos modificando dos leyes que constituyen la columna vertebral de todo el sistema financiero nacional, como las leyes del Banco Central y de entidades financieras, cuya importancia y trascendencia bien demandan otro tipo de tratamiento y análisis.

Creo que la cuestión central probablemente pase por la posibilidad de que el Banco Central tenga la oportunidad de actuar como prestamista de última instancia, según ha quedado expuesto en la opinión de algunos oradores preopinantes.

Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en el país? Podemos afirmar que la crisis en que nos encontramos obedece a diversos motivos, que pueden reducirse a dos: la incidencia del factor externo y la falta de previsión de las autoridades económicas, que hicieron oídos sordos a opiniones de diversos sectores de la vida nacional que alertaban sobre desvíos en el rumbo económico trazado, fundamentalmente en lo que respecta al aumento del gasto público que, como expresé en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley que modificaba las leyes del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias, se incrementó en un 56 por ciento desde 1991 hasta 1994.

Otra sería la situación de nuestro país frente a la crisis internacional desatada por el llamado “efecto tequila” si la ecuación de gastos e ingresos de las finanzas públicas hubiese tenido en la actualidad el significativo superávit que experimentó en los años de bonanza de 1992 y 1993.

¿Cuál habría sido —me pregunto— la reacción del público en general, en lo que respecta a la confianza en el plan de convertibilidad y en la solvencia de las distintas entidades financieras?

La respuesta parece obvia. Los problemas inflacionarios e hiperinflacionarios que padeció el

país son un recuerdo latente en la memoria de todos nosotros.

Es por ello que la interpretación inmediata y totalmente acertada es que la existencia de equilibrio fiscal es una garantía de estabilidad, de baja inflación y de confianza por parte de todos los sectores de la economía y de la sociedad.

Todo indicador que muestre lo contrario da origen a señales de alarma que comienzan a preocupar al inversor, que traen intranquilidad, lo que se materializa en una actitud desconcertante y aleatoria de los mercados, que no responden positivamente en muchas circunstancias aunque el gobierno se esfuerce en anunciar y concretar medidas para luchar contra la crisis.

Es que en estas circunstancias se ha cortado un bien que es muy difícil de recuperar, que resulta ser el de la confianza pública. Aspectos socioeconómicos y hasta psicológicos inciden sobre este punto y es por ello que la recuperación de este esquivo bien es harto complicada para un gobierno que carece parcialmente de ella.

A esta altura de la exposición resulta de interés citar un conjunto de datos económicos aparecidos en un artículo publicado por el diario "La Nación", del 4 del corriente, cuyo autor es Luis García Martínez.

Existen dos datos que ilustran con meridiana claridad la situación actual. A tres meses de los acontecimientos sucedidos en México las reservas líquidas se redujeron un tercio, es decir 5.244 millones de dólares, y el total de los depósitos declinó en un 16 por ciento, o sea, 4.970 millones de pesos y 2.483 millones de dólares.

Al respecto parece que poco valen las medidas ejecutadas en los últimos años por la Argentina, aunque es justo decir que fueron muchas y buenas, si al final de este primer tramo del camino parecía observarse cierto ablandamiento en la convicción de continuar con el rumbo elegido.

Han existido diversos factores que conspiraron contra este objetivo. Afanes electoralistas, ingentes gastos en esta materia y la reforma de los estados provinciales en muchos casos aún no iniciada, entre otros aspectos, han aportado una cuota negativa, a lo que se suma el criterio equivocado del Estado nacional que, montado a caballo de la euforia del éxito transitorio en materia económica y electoral, desoyó las advertencias e incrementó alegremente el gasto público, convencido de que el incremento de la recaudación fiscal con el superávit consecuente lo facultaba a elevar sus gastos, sin pensar en un

futuro de crisis y recesión que venía golpeando las puertas de la economía mundial.

Podríamos decir que el problema de México resultó algo que no estaba previsto, pero juntamente con ello es de importancia aclarar que la función de gobierno no sólo es la de administrar, sino que también debe agregarse la visión de estadista, que debe ser innata en quienes asumen una actitud de gobierno, y es la que ayuda a prevenir hechos que si bien no están a la luz, subyacen y se ponen en evidencia cuando se analizan detenidamente las tendencias mundiales en la materia.

Señor presidente, considero que con la sanción de la norma legal que nos ocupa estamos finalizando con la maratónica tarea legislativa de sancionar un conjunto de leyes que tiene por objeto restablecer el equilibrio y la confianza de nuestro sistema económico. Sólo el tiempo dirá si las medidas aplicadas y por aplicar han sido las adecuadas, pero lo más importante es que la lección que nos ha dado esta crisis debe quedar latente, de manera tal que no incurramos nuevamente en los graves errores cometidos ni tampoco en una actitud de soberbia política que haga oídos sordos de las advertencias y recomendaciones de los diversos sectores que hacen a la vida socioeconómica nacional.

Pasando a analizar el proyecto de ley en cuestión, quiero comentar los aspectos vinculados a las modificaciones propuestas a la Carta Orgánica del Banco Central y a la creación del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos.

Con relación a lo dispuesto en el artículo 1º, se dispone la creación del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, que será limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, según lo establecido en la Ley de Entidades Financieras.

A tal efecto, cabe preguntarse con qué fondos se constituirá el mencionado sistema de seguro de depósitos bancarios, pues no se hace expresa mención en el proyecto que analizamos, ni tampoco en el decreto 445/95, que en su artículo 7º hace referencia a él. De todas maneras considero justo resaltar que el mencionado artículo aclara que los fondos que se destinen a tal fin no podrán comprometer los recursos del Banco Central ni del Tesoro nacional. Sin embargo, creo que este tema es de los que más interrogantes suscita en vastos sectores, por lo que cabe esperar el funcionamiento de este singular instituto con toda la atención y adecuado contralor legislativo en la materia.

Con relación al artículo 2º, sobre modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, puede observarse que ellas se orientan a aumentar la facultad de la citada entidad en lo que respecta a la posibilidad de encarar el salvataje de entidades financieras afectadas por problemas de iliquidez. Al respecto, la modificación del inciso c) del artículo 17 faculta al directorio a excederse en los plazos previstos actualmente, cuando las circunstancias así lo aconsejen, pero en todos los supuestos sin comprometer para ello las reservas de libre disponibilidad, lo cual es concordante con lo expresado en los artículos 4º y 6º de la ley 23.928.

Similar disposición, en cuanto al resguardo de la plena vigencia de la Ley de Convertibilidad, lo constituye la modificación del inciso d) del artículo 17, ya que hace referencia a que la toma de préstamos de organismos multilaterales u oficiales extranjeros, bancos centrales o entes de los cuales sólo el Banco Central pueda ser prestatario, por sí o por cuenta del Tesoro nacional como agente financiero de la República, no podrán llevarse a cabo comprometiendo las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetaria.

En el punto 4, del artículo 2º del proyecto, se expresa que se incorpora como inciso b) del artículo 18 un nuevo texto. Entiendo, señor presidente, que aquí hay un error de técnica legislativa, dado que en el texto vigente de la ley 24.144 ya existe un inciso b), que se refiere a la posibilidad del Banco Central de obtener créditos desde el exterior. Me pregunto si al decir "incorpórase" se quiso decir en realidad "sustituyese". La duda se me plantea porque, evidentemente, no tiene nada que ver el texto vigente del inciso b) de este artículo 18 con lo que contiene el proyecto y, si en realidad se quiso mantener el texto vigente, el proyecto debió decir "agregase" al inciso b) del artículo 18.

Con relación a la modificación del segundo párrafo del artículo 21, quiero hacer referencia a una parte que en nada aclara el citado punto. Se propone el siguiente agregado: "... salvo por los depósitos que efectúe por cuenta y orden de éste en entidades financieras nacionales o internacionales..." Al respecto cabe preguntarse, ¿cuál es el significado de este punto? El inciso actualmente vigente expresa que el Banco Central no pagará interés alguno sobre las cantidades depositadas en la cuenta del gobierno nacional, por lo cual el agregado propuesto establece una excepción que no resulta clara. Desearía, por lo tanto, que se clarificara lo concerniente a este tópico.

Uno de los pilares de este proyecto de reforma es indiscutiblemente lo que contiene el capítulo IV del título III de la Ley de Entidades Financieras que se incorpora. Se denomina "Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios". Con esta innovación se pretende, a mi juicio, sanear el sistema financiero y restituir la confianza de los ahorristas.

De todos modos, entiendo que en el punto IV del artículo 3º, punto 2, denominado "Responsabilidad", hay una remisión que no es del todo clara, en la parte que se refiere al artículo 49, segundo párrafo *in fine* de la Carta Orgánica del Banco Central. Me pregunto si, en realidad, no debió referirse al artículo 49, inciso a).

En el punto 4 del artículo 3º se dice que se agrega como segundo párrafo del artículo 45 de la Ley de Entidades Financieras un nuevo texto. En rigor, debió decirse "intercálase", dado que en el texto vigente ya existe un segundo párrafo que ahora pasará a ser tercero. Prueba de ello es lo que dispone el punto 5 a continuación, que ya alude al tercer párrafo del artículo 45.

Otro aspecto a tener en cuenta es la modificación del artículo 49, incisos d) y e), por los que se establece que el privilegio de los depositantes es de 5 mil pesos o su equivalente en moneda extranjera. En cuanto al plazo de los depósitos, que antes era de ciento ochenta días, se lo reduce a noventa.

El artículo 5º prevé la confección de un texto ordenado de la Carta Orgánica. Indudablemente, se trata de una sabia previsión atento a todos los parches que tiene la ley. Cabe señalar que esta facultad ya resulta de lo que dispone la ley 20.004 y que es francamente desconcertante lo que establece este artículo, en su parte final, cuando expresa "que contemple lo previsto por el artículo 7º de la ley 24.144". Como se sabe, esta norma se refiere a la designación de las autoridades del Banco Central.

Finalmente, en el artículo 7º, inciso 2, es confusa la expresión "y de la ley 24.145". Quizás, debió referirse al artículo 8º de esa ley, que fue sustituido por el artículo 1º de la ley 24.474 y que se refiere al capital social de YPF.

Señor presidente: sin duda que uno de los elementos que más cuestionamientos ha presentado a la amplitud de facultades que se concede al Banco Central de la República Argentina es su discrecionalidad para el manejo de intereses financieros que puedan influir con su acierto o con su error sobre los fines buscados por la Ley de Convertibilidad, que es el pilar de la estabilidad por la que se ha venido jugando grandemente

tanto el gobierno como el pueblo de la Nación en estos últimos años.

Nadie duda de las buenas intenciones de quienes estarán encargados del manejo de un fondo fiduciario que viene a convalidarse por las disposiciones que votamos. Pero no ha faltado la expresión de temores sobre las presiones que puedan ejercerse sobre ellos, haciéndolos incurrir en errores involuntarios, pero que podrían resultar nefastos para los grandes objetivos antes proclamados.

Creo que la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista en el artículo 7º del proyecto tiende a agregar un elemento más de control frente a los temores que muchos tienen ante la sanción legal que hoy se consagrará. Deseo fervientemente que el Congreso argentino, al margen de todo partidismo, coincida en la designación de quienes sean más aptos para cubrir esta importante misión de contralor y asesoramiento. También debemos recalcar que con la institución aludida el Congreso ejercerá una función constitucional de la que no debe desprenderse en la delicada materia que tratamos.

Sin lugar a dudas mucho más podría haberse comentado sobre el tema que abordamos, pero los tiempos han sido escasos debido a la premura que impone la crisis en que nos encontramos inmersos. Consciente de su gravedad, y sin perjuicio de las observaciones y reservas que he formulado, voy a apoyar en general el proyecto, con la esperanza de construir un aporte que ayude a recobrar la confianza de los ahorristas e inversores en el sistema financiero argentino.

Sr. Presidente (Bittel). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca del bloque PAIS.

Sr. Cendoya. — Si me permite, señor presidente, quisiera hacer un breve comentario.

Durante el curso de mi exposición omití solicitar la inserción de tres documentos que tengo en mi poder. Uno es el relativo a un informe del Instituto de Economía y Mercados, el otro está referido a la revista "Bancos y Mercados" y el último es el realizado por ABIRA y otras entidades financieras sobre las cifras estadísticas que mencioné en su momento.

Por este motivo solicito que cuando se voten las inserciones se tenga en cuenta mi pedido.

Sr. Presidente (Bittel). — Así se hará.

Tiene la palabra el señor senador por Catamarca del bloque PAIS.

Sr. Fadel. — Antes de fundamentar brevemente la posición del bloque PAIS sobre este proyecto, quiero recoger algunas considera-

ciones coincidentes que han realizado senadores de diferentes bloques, como las expuestas por los señores senadores Cendoya, del bloque radical, y Cafiero, del bloque Justicialista.

Me voy a referir a consideraciones a partir de las cuales nos permitimos arribar a una simple conclusión, cual es que este proyecto implica modificar el espíritu y la filosofía del rol que el Banco Central debería cumplir de acuerdo con las reformas que se vienen realizando desde 1992 hasta la fecha. Esto marca claramente la falta de definición coherente por parte del gobierno nacional acerca de cuál es el rol que debe tener el Banco Central de la República Argentina en nuestra política monetaria.

Realizada esta breve consideración, paso a fundamentar la posición de nuestro bloque respecto del proyecto en sí mismo. Sin duda el mecanismo de seguro de depósito que se crea a partir de este proyecto nos lleva a coincidir con su filosofía en términos generales.

Pero debemos decir también que a partir del mismo se estructura un mecanismo de salvataje del sistema financiero vinculado al funcionamiento de un fondo fiduciario creado por decreto, a partir del cual el directorio del Banco Central de la República Argentina, en un ámbito de amplia discrecionalidad, cuenta con atribuciones para reestructurar las entidades financieras con problemas, ya sea mediante su capitalización, la compra de sus carteras o la fusión con otras entidades. Una vez tomada la decisión se encomienda al fondo fiduciario la realización de las operaciones financieras que correspondan.

Conceptualmente este mecanismo parece totalmente razonable, aunque puntualmente consideramos que se deberían acotar los grados de libertad que se le otorgan al directorio del Banco Central de la República Argentina. Por esta razón oportunamente, y al finalizar mi exposición, voy a solicitar la incorporación de las modificaciones que propone nuestro bloque sobre esta cuestión.

También vemos en este contexto un serio inconveniente legal que se ha planteado en el decreto de creación de este fondo fiduciario, porque según este instrumento legal el fondo no sólo opera por órdenes del Banco Central sino que cuenta con autonomía para hacer operaciones por cuenta propia. Esto sin duda está fuera de toda institucionalidad, carece de mecanismos de control y excede largamente las facultades extraordinarias que podrían considerarse razonables para resolver esta crisis. Parece el resultado legal de los conflictos de poder entre el

Ministerio de Economía y el Banco Central, en donde el Ministerio de Economía no se resigna a ser un simple mandante del Banco Central y pretende tomar decisiones con un altísimo grado de discrecionalidad.

De manera tal que la existencia de este instrumento legal nos hace imposible apoyar esta norma porque consideramos que es correr un alto riesgo otorgar al Ministerio de Economía la posibilidad de adoptar decisiones con tan alto grado de discrecionalidad a través de un fondo fiduciario creado por medio de un decreto con una notable y notoria vaguedad.

Decimos que existe un alto riesgo porque de esa manera estamos dejando abierta la posibilidad de que nos suceda lo mismo que ya nos ocurrió en 1982.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Fadel. — Fundamentamos también nuestro voto negativo a este proyecto en el hecho de que se realizan modificaciones a algunas leyes de fondo, como es el caso de las leyes de cooperativas, para lo cual no se han tomado los recaudos necesarios y no se ha consultado a las entidades financieras al respecto.

Las consideraciones que acabo de realizar brevemente fundamentan nuestro voto negativo, y los hechos que están ocurriendo en el país desde el punto de vista financiero junto con las medidas tomadas a nivel del gobierno nacional y del Congreso de la Nación nos están reafirmando que realmente la Argentina no es México, de la misma manera que Venezuela no es Ecuador.

Con estas palabras dejo fundamentado el voto negativo del bloque PAIS.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a llamar para formar quórum y proceder a la votación.

— Así se hace.

Sr. Fadel. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Fadel. — Voy a solicitar la inserción de algunas consideraciones y propuestas de modificación a algunos artículos.

Sr. Presidente (Menem). — Oportunamente someteré a votación todas las inserciones.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Menem). — Ruego a los señores senadores tomar asiento, porque ya tenemos quórum.

En primer lugar se van a votar los tres pedidos de inserción formulados.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se procederá en consecuencia¹.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se toma nota de la mayoría resultante de la votación.

Sr. Vaca. — No hace falta.

Sr. Molina. — No hace falta.

Sr. Presidente (Menem). — Veintiuno sobre veintisiete.

En consideración en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Como no hay otros temas para tratar, queda levantada la sesión.

— Son las 22 y 57.